

TESIS

TEMA: PRIVATIZACIONES



USAL
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN

EN SINDICATURA CONCURSAL

PRIVATIZACIONES

ALUMNA: VALENTINA MARIA DENDA

PROFESOR: Dr. RUBEN BOISSELAU



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1999.

VALENTINA MARIA DENDA
CONTADORA PUBLICA (U.S.A.)

INDICE

| | |
|--|----|
| PRIVATIZACIONES | 3 |
| LAS EMPRESAS EN CRISIS DEL ESTADO | 3 |
| LA SITUACIÓN DE LA ARGENTINA HASTA 1989 | 3 |
| LA ARGENTINA DESPUÉS DE 1989 | 6 |
| LA PRIVATIZACIÓN EN MARCHA | 8 |
| MARCOS REGULATORIOS Y REGULACIÓN ECONÓMICA | 12 |
| PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA | 14 |
| EMPRESAS PRIVATIZADAS | 15 |
| Aerolíneas Argentinas | 15 |
| Entel | 17 |
| YPF | 22 |
| PERSPECTIVAS DE UN NUEVO ESQUEMA DE PODER ECONÓMICO | 24 |
| LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN EN LOS PAÍSES MIEMBRO DE LA OLACEFS (ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES) | 25 |
| CONTROL DE LAS PRIVATIZACIONES | 26 |
| LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS | 30 |
| Sector Activos Privatizados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. | 30 |
| Sector Ferrocarriles | 31 |
| Sector Energía Eléctrica | 33 |
| Sector Puertos | 36 |
| Empresas Dependientes del Ministerio de Defensa | 37 |
| Sector Activos Privatizados de Gas del Estado | 38 |
| Sector Obras Sanitarias de la Nación | 41 |
| CONCLUSIONES | 42 |
| teléfonica de argentina s.a. | 46 |
| DATOS DE LA EMPRESA | 46 |
| Régimen Tarifario | 48 |
| El Capital | 48 |
| Area de Servicio | 50 |
| Empresas Vinculadas | 50 |
| Telintar Sur S.A. | 51 |
| Radiollamada S.A. | 51 |
| Telinver S.A. | 51 |
| Startel S.A. | 51 |
| Miniphone S.A. | 52 |
| Telecomunicaciones y Sistemas (TYSSA) | 52 |
| Telefónica Comunicaciones Personales (TCP S.A.) | 52 |
| Advance S.A. | 52 |
| Estructura Empresarial | 53 |
| ESTADOS CONTABLES | 54 |
| Año 1.991 | 54 |
| Año 1992 | 56 |
| Año 1993 | 58 |
| Año 1994 | 60 |
| Año 1995 | 62 |
| Año 1996 | 64 |
| Año 1997 | 66 |
| Año 1998 | 68 |
| ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA | 71 |
| Composición de la Inversión | 71 |
| Composición de la Financiación | 71 |
| Composición de los Resultados | 71 |
| ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS | 73 |
| Evolución de la Inversión | 73 |

| | |
|---|-----|
| Primer Nivel de Análisis | 73 |
| Segundo Nivel de Análisis | 74 |
| Evolución de la Financiación | 75 |
| Primer Nivel de Análisis | 75 |
| Segundo Nivel de Análisis | 76 |
| Evolución de los Resultados..... | 77 |
| Primer nivel de Análisis | 77 |
| Segundo nivel de Análisis | 78 |
| ANALISIS DE LAS VARIACIONES MAS IMPORTANTES..... | 79 |
| Inversiones Corrientes..... | 79 |
| Créditos Por Ventas..... | 79 |
| Bienes de Uso..... | 80 |
| Bienes Intangibles | 81 |
| Inversiones no Corrientes..... | 82 |
| Deudas Bancarias y Financieras..... | 83 |
| Gastos de Comercialización | 85 |
| Previsión Deudores Morosos..... | 85 |
| Otros Egresos Netos | 86 |
| Ventas..... | 86 |
| ANALISIS DE SITUACION ECONOMICA | 89 |
| Indices de Rentabilidad | 89 |
| Rentabilidad del Patrimonio Neto | 89 |
| Rentabilidad de la Inversión Total | 90 |
| Efecto Palanca..... | 91 |
| Indice de Du Pont..... | 93 |
| ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA..... | 95 |
| Indices de Liquidez | 95 |
| Liquidez Corriente..... | 95 |
| Liquidez Corriente necesaria | 97 |
| Liquidez Seca | 100 |
| Indice de Endeudamiento | 101 |
| Indice de Financiación de la Inmovilización | 102 |
| CONCLUSIONES | 103 |
| Análisis de la Estructura y Tendencias..... | 103 |
| Composición de la Inversión | 103 |
| Composición de la Financiación | 103 |
| Composición de los Resultados..... | 103 |
| Análisis de la situación económica y financiera..... | 104 |
| Rentabilidad del Patrimonio Neto | 104 |
| Indice de Du Pont..... | 104 |
| Liquidez Corriente..... | 104 |
| Plazo de Realización del Activo Corriente y exigibilidad del Pasivo Corriente | 104 |
| Endeudamiento..... | 105 |
| Situación Económica..... | 105 |
| Situación Financiera | 105 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 106 |

PRIVATIZACIONES

LAS EMPRESAS EN CRISIS DEL ESTADO

LA SITUACIÓN DE LA ARGENTINA HASTA 1989

En 1989 existía una crisis profunda, lo que obligó a promover un plan de reformas económicas drásticas, basada principalmente en la privatización de las empresas de propiedad del Estado cuyo déficit crónico había sido la principal causa del desajuste.

Antes de describir esta situación vale la pena hacer una mención previa.

Hacia 1930 la Argentina era todavía un país de economía agrícola-ganadera. Si bien contaba con industrias propias, sus fuentes principales de ingresos consistían en la exportación de productos agropecuarios.

Asimismo, la presencia del Estado en la economía era escasa ya que vivían bajo la influencia del sistema económico del siglo XIX, signado por una gran concentración del capital en manos de unas pocas familias propietarias de grandes extensiones de campo.

Este sistema entró en crisis luego de la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929, cuyos efectos se extendieron a nuestro país, fue así que llegó rápidamente hasta la Argentina y cobraron inmediata presencia los llamados entes reguladores de las actividades productivas.

En 1946 se promovió una reforma económica basada principalmente en la estatización de las principales compañías de prestación de servicios públicos. Hasta ese momento, la prestación de los servicios públicos esenciales había estado en manos de compañías privadas, en general de capital extranjero.

En 1955, la Argentina se había convertido en un país en el cual la regulación en la economía era absoluta. Todos los servicios públicos importantes – ferrocarriles, obras sanitarias, luz, gas, teléfonos – estaban prestados por compañías estatales para el manejo de actividades productivas tales como el petróleo. Ello trajo como consecuencia, además, una gran concentración del poder en manos del gobierno federal, pues todas estas empresas públicas pertenecían a este último.

En 1955, se produjeron modificaciones en el terreno político más no en el económico, y puede decirse que una de las razones que explican este fenómeno es que el empresariado público fue un gran centro de poder político y económico que ningún gobierno estaba dispuesto a resignar. Sin lugar a dudas, ello fue la causa de la mala administración de dichas empresas en las que no existía control del gasto ni de las inversiones.

Cabe mencionar que la existencia prolongada de este empresariado público nos hizo olvidar la verdadera relación existente entre estas empresas y sus clientes. La misma nunca fue vista en la Argentina como lo que es y debe ser, es decir, una relación entre un proveedor de servicios y sus clientes, donde primero se esfuerza por mejorar y ampliar su oferta constantemente y ofrecer a la par precios competitivos en el mercado. Por el contrario, la relación entablada entre estas empresas y sus clientes nunca tuvo en cuenta las más elementales leyes de la oferta y la demanda ni la protección del consumidor, ya fuera al momento de fijar las tarifas como en lo atinente a la calidad del producto ofrecido.

Para tener una idea de esto, basta recordar que una empresa proveedora del servicio telefónico debe tener como objetivo principal la colocación cada vez mayor de líneas telefónicas, pues se presume que sus ingresos dependen de ello. Sin embargo, en la Argentina anterior a 1989 obtener la colocación de una línea telefónica demandaba años desde el momento del pedido hasta su instalación en el domicilio del usuario. La obtención de un teléfono en la Argentina no era una operación comercial sino un milagro. Ello explica por qué todas estas empresas eran deficitarias, déficit que eran cubiertos invariablemente mediante aportes del tesoro nacional.

Frente al cúmulo de tareas, misiones, de empresas, de funciones que se asignaban al Estado, no hay un solo país, en donde no se replantee en estos momentos el papel del Estado en relación con la sociedad.

Ahora bien, frente a la crisis del estado social no basta decir que volvamos al estado liberal, cerremos cosas, ahorremos gastos, reduzcamos los déficits, eliminemos servicios y dejemos que la sociedad vaya por sí misma. Desregulemos, privaticemos y volvamos al estado mínimo.

Eso no es solución, porque este mundo está hecho a un estado y situación que quiere un mínimo de satisfacción, de seguridad, de confianza en el futuro.

El estado no puede ser eliminado ni sustituido. Lo que sucede es que el Estado debe ser reformado, de manera tal que cumpla su función de servicio al individuo sin ser aparato de su dominación, sin que las funciones y tareas que se le encomiendan atenten contra lo que constituye la exigencia y condición mínima de los hombres. Que es su libertad.

El Estado y la sociedad no son un fin en sí mismos ni una entidad abstracta a la que deban subordinarse los ciudadanos. Por el contrario, el objeto del estado y de la sociedad es el cumplimiento de los fines personales de los ciudadanos.

La expansión del Estado ha tenido básicamente dos sectores de desarrollo: el sector empresarial público y la expansión de las prestaciones y los servicios sociales, según un modelo burocrático administrativo: las prestaciones por desempleo, las sanitarias, a los ancianos, educativas, asistenciales.

Hoy se postula que en sustitución del modelo burocrático administrativo, que ha venido percibiendo la prestación de servicios sociales, sean empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, capaces de asumir con mayor flexibilidad, eficacia y calidad la satisfacción de las necesidades sociales.

Desde el punto de vista organizativo institucional esto supone la sustitución del viejo modelo del Estado, jerárquico, unitario, centralizado, gestor directo, con un nuevo tipo de administración en la que una multiplicidad de organizaciones no gubernamentales o independientes del gobierno, aunque sean públicas, que se ha llamado el “tercer sector”, asuman la gestión de servicios con autoridad en muchos casos delegada del Estado y con la supervisión o inspección del estado.

La privatización, es una operación con determinadas consecuencias económicas, con determinadas rentas e ingresos atípicos para el Estado. De lo que se trata en primer lugar, es de restaurar la iniciativa individual y la responsabilidad personal en el funcionamiento y satisfacción de muchas de las necesidades sociales. En segundo lugar, en devolver al individuo la libertad de elección, para que éste pueda satisfacer sus propias necesidades en una u otra oferta plural. Y en tercer lugar, en recuperar la calidad y la excelencia en las prestaciones.



LA ARGENTINA DESPUÉS DE 1989

El gobierno de esa época estaba basado en la iniciativa de la empresa privada. Así se impulsó la reforma del Estado con el dictado, en agosto de 1989, de una ley que dispuso la adopción de dos grandes medidas: 1) la cesación de pagos del Estado Nacional y 2) la privatización de prácticamente todas las empresas de propiedad del Estado.

Se puede decir, que el Estado puede efectivamente declarar su propia quiebra. Y ello es precisamente lo que ocurrió con la Argentina en 1989. El Estado tenía hace 6 años su economía en estado de cesación de pagos.

Técnicamente, el Estado argentino estaba en quiebra y la misma fue decretada con la sanción de la Ley de Reforma del Estado. Se dispuso en ella la suspensión de todos los pagos a sus acreedores, la suspensión de los juicios contra el Estado por dos años y la emisión de bonos - garantizados por el tesoro- pagaderos a 16 años, para el pago de las deudas del Estado contraídas con anterioridad.

El segundo de los grandes temas de la Ley fue el programa de privatizaciones. La misma ordenó la privatización de las empresas públicas que administraban los servicios de teléfonos, correos, transportes aéreos, ferrocarriles, subterráneos, petróleo, gas, electricidad, agua potable y cloacas, puertos, canales de televisión y emisoras de radios, entre otras. Fue dada en concesión la explotación de una importante extensión de las rutas nacionales y se vendió la principal acería nacional (SOMISA). De esta forma se desprende que los principales servicios públicos prestados hasta ese momento por el Estado, bajo la forma de monopolio, pasarían a ser prestados por grupos de empresas privadas de capital nacional y extranjero.

La tarea no era fácil y ello contaba con tres grupos posibles de oposición: 1) el establishment político, 2) los grandes sindicatos y 3) las empresas proveedoras de insumos para las empresas públicas.

El primero había nacido y se había criado bajo la impronta ideológica del estatismo. Desde 1946 se venía escuchando en la Argentina que permitir a las empresas privadas –principalmente extranjeras- la prestación de los servicios públicos básicos implicaba una resignación de la soberanía nacional. Además, los políticos veían a la privatización con enorme temor, pues con ella perderían la posibilidad de acceder a los puestos de poder político y económico que el empresariado público brindaba.

Tampoco miraban con agrado a la reforma los grandes sindicatos. Las empresas públicas estaban en general sobredimensionadas en personal, lo que proveía de una abultada clientela a los sindicatos quienes corrían el riesgo de verla sustancialmente disminuida con la privatización.

Por último existía la oposición ejercida desde el empresariado privado. Curiosamente éste iba a ser el gran beneficiario del movimiento privatizador, sin embargo, muchas grandes compañías privadas proveían de insumos a las empresas públicas a precios ajenos a la realidad del mercado. Estas ganancias iban a verse disminuidas también con la privatización.

La Ley de Reforma del Estado permitía que los empleados de las empresas públicas privatizadas puedan adquirir una parte del paquete accionario de las nuevas empresas prestadoras de servicios públicos.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

LA PRIVATIZACIÓN EN MARCHA

Al comenzar el proceso de privatizaciones existía en la Argentina una creencia, que luego se demostró que era errónea, según la cual estas empresas no tenían valor alguno. Habíamos vivido por más de 40 años sufriendo los malos servicios prestados por ellas y habíamos soportado sus constantes déficit fruto de sus malas administraciones. Lo único que nos interesaba era que fueran transferidas al sector privado como medio de lograr dos objetivos: la reducción del déficit del presupuesto que sufragaba invariablemente con impuestos y la prestación de un servicio eficiente.

Si bien las empresas como tales estaban arruinadas, las ganancias potenciales que podían producir eran enormes, en la medida en que la mayoría de ellas constituyen importantes monopolios garantizados por el Estado capaces de producir oferta de servicios a una gran cantidad de personas. Sin ir más lejos, la concesión para la provisión de agua potable y servicios cloacales a la Ciudad de Buenos Aires, y sus alrededores tienen un mercado potencial de 9.000.000 de habitantes y es la más grande del mundo.

Desde el punto de vista técnico de la privatización, fueron empleados básicamente dos sistemas: el de la venta de las empresas o el de la concesión de los servicios. En ambos casos se empleó el sistema de la licitación pública internacional.

La Ley de Reforma del Estado adoptó cuatro medidas básicas:

- 1) La modificación de los estatutos de algunas empresas que pasaron a estar constituidas como sociedades anónimas (ej. : la empresa nacional de petróleo)
- 2) La partición de algunas empresas en unidades más pequeñas (ej. : la empresa nacional de energía, la empresa nacional de gas)
- 3) Una gran reducción del personal de las empresas públicas
- 4) La transferencia al sector privado sin pasivos.

En relación con la reducción del número de empleados, debe tenerse en cuenta que todas las empresas públicas tenían un gran exceso de personal acumulado a lo largo de décadas, fruto de una mala administración. Como consecuencia de ello se produjo reducciones sensibles de personal. Para ello se acudió principalmente a los llamados “retiros voluntarios”, esto es el pago de una jubilación anticipada. El caso más notorio de reducción del personal se produjo en la empresa nacional de petróleo (YPF) quien de aproximadamente 60.000 empleados que poseía en 1989 ha pasado a tener ahora solamente 5.500.

Fuera de este caso tenemos el de la acería nacional (SOMISA), cuyo personal de 10.000 empleados reducido a 2.500 y el de la empresa nacional de agua potable (OSN), que de 9.000 empleados fue transferida al sector privado con 3.000. Asimismo y como medio de paliar la desocupación que este reordenamiento laboral traería aparejado se promovió una política de “microemprendimientos” que consistía en la creación de pequeñas empresas privadas integradas por los ex empleados de las empresas privatizadas cuyo objeto es proveer de servicios a estas últimas.

La segunda decisión para hacer más atractiva la venta de las empresas públicas fue la de transferirlas sin pasivos. Como fruto de su mala administración, las empresas públicas habían ido acumulando durante décadas pasivos muy significantes que recaían principalmente en dos aspectos: 1) endeudamiento en condiciones inaceptables para el mercado y contratos tomados por precios muy elevados y 2) una gran proliferación de juicios en los que por lo general resultaba vencida la empresa pública. Para evitar el fracaso de las privatizaciones ninguno de estos pasivos fue transferido a los compradores, quienes de tal modo adquirieron las empresas en óptimo estado patrimonial.

Los pasivos de las empresas fueron transferidos a los que se denominaron entes residuales. En efecto, la técnica de privatización empleada en muchas de las empresas privatizadas (ej.: teléfonos, agua potable) fue la de mantener durante el lapso inmediato a la privatización una suerte de empresa residual. La misma no tenía otro objeto que hacerse cargo de la liquidación de los activos físicos que no habían sido transferidos al adquiriente, de reubicar al personal que no había sido tomado por aquél y de tomar a su cargo los pasivos de la empresa privatizada.

El mercado argentino de las privatizaciones era enormemente atractivo para los inversores extranjeros, pues se daba en él una conjunción de 3 ventajas: a) un bajo precio de adquisición, b) reducción de personal innecesario, lo que evitaba los costos de los eventuales despidos y el conflicto con los sindicatos y c) un patrimonio empresarial saneado que permitía volcar la totalidad del monto de las inversiones al servicio. A ello debe sumarse que en algunos casos (ej. : teléfonos y agua potable) se establecía un monopolio a favor de los adquirientes.

Podemos decir que los potenciales interesados en el mercado serían grandes grupos de inversores extranjeros asociados con empresarios locales también importantes. Por otra parte la participación de grupos extranjeros era importante no solo por el volumen de las inversiones sino también por la experiencia que podían aportar en materia de operación técnica de los servicios. En efecto, el empresariado argentino carecía de experiencia en la prestación de los servicios públicos objeto de privatización en la medida en que los mismos habían sido prestados durante casi cincuenta años por el gobierno. Para suplir esta deficiencia —que no podía